

El PP y Podemos amenazan al Gobierno con tumbar su reforma fiscal

Los populares trabarán la norma con su mayoría en el Senado y los morados no se apean de hacer permanente el impuesto a las energéticas

J. ARIAS / M. A. ALFONSO

MADRID. La reforma fiscal que el Gobierno sacó adelante hace dos semanas en el Congreso en otra negociación con sus socios al borde del abismo corre el riesgo de naufragar a izquierda y a derecha con Podemos y el Partido Popular exprimiendo la endiablada aritmética parlamentaria de la legislatura para pasar cuentas a Moncloa. El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo utilizará la mayoría absoluta que ostenta en el Senado para trabar la iniciativa que el Ejecutivo pretende sacar adelante a través de enmiendas parciales y obligar así a que éstas vuelvan al Congreso de los Diputados para su ratificación definitiva. Mientras, los morados advierten a Pedro Sánchez de que, si no cumple lo comprometido para convertir en estructural el impuesto a las energéticas, ejercerán su poder de veto en la Cámara baja y harán descarrilar la medida con sus cuatro diputados, claves para que esta pueda llegar al BOE. «Si no hay avances, no hay votos», señalan fuentes del partido morado a este periódico.

Las enmiendas que los populares impulsarán en la Cámara Alta irán encaminadas a plantear rebajas de impuestos y bonificaciones para los jóvenes menores de 35 años en los primeros cuatro años de su vida laboral, una medida que el jefe de la oposición defiende desde hace meses. Así lo confirmó ayer el propio Alberto Núñez Feijóo, quien censuró en Telecinco que el Gobierno haya incrementado los impuestos y las cotizaciones a la Seguridad Social «82 veces» en los últimos años y que «tenga en cartera el incremento de 46 impuestos más», lo que se traduce –según su cálculo– en una subida de impuestos de «alrededor de 8.000 millones de euros más».

«Lo más importante en nuestro país en este momento es la dificultad que tienen los jóvenes

para llegar a fin de mes y para adquirir una vivienda», zanjó el líder de la oposición, quien también aprovechó la ocasión para atacar con dureza a Sánchez por la «corrupción que acecha al presidente» ya «habría hecho dimitir a cualquiera», además de hacer hincapié en que el comisionista «Víctor de Aldama ha mentido menos que el presidente del Gobierno y que parece que la Fiscalía no tiene ninguna duda de ello, porque le ha dejado libre».

Las enmiendas de los populares saldrán adelante en la Cámara alta gracias a su mayoría absoluta, con lo que los de Feijóo ganarán tiempo de presión a la espera de ver cómo el Gobierno sigue lidiando con las demandas de sus socios. El Gobierno logró aprobar sobre la bocina un paquete fiscal rebajado sobre lo que ambicionaba –y que incluye la obligada transposición de la directiva europea para imponer un tipo mínimo del 15% para las multinacionales–, lo que consiguió entre las contrapuestas exigencias de Podemos y Junts tras la prórroga de un año al impuesto a las energéticas.

La mesa de partidos pendiente Los morados, precisamente, llevan dos semanas exigiendo al PSOE la convocatoria de la mesa de partidos para renegociar la proposición de ley sobre el impuesto a las energéticas que prometió el Ejecutivo a cambio de su apoyo. «El PSOE tiene que cumplir y tiene que convocar esta semana esa mesa de partidos. Este fue el acuerdo que firmó con Podemos», insistió la coportavoz de la formación Isa Serra, antes de calificar de «vergonzoso» que los socialistas, tras la catástrofe de la DANA en Valencia, sigan retrasando la activación de la iniciativa comprometida.

Así, la dirigente de la formación que lidera Ione Belarra exige a los socialistas que «no pierdan más tiempo» y respeten lo acordado, dado que en caso contrario «Podemos no dará el voto a favor cuando vuelva al Congreso». Un órdago que se ha convertido en algo habitual en la relación de esta legislatura entre Podemos, que desde 2020 hasta 2023 formó parte del primer gobierno de coalición de Sánchez, y La Moncloa.



Alberto Núñez Feijóo



Ione Belarra



El grupo cementero y de materiales de construcción vuelve a Sant Vicenç dels Horts (Barcelona). R. C.

Molins, la primera gran empresa catalana que regresa a casa tras la huida masiva por el 'procés'

La Generalitat vuelve a reconocer la Constitución: Illa acudirá este 6-D al acto en Madrid de aniversario de la Carta Magna

CRISTIAN REINO

BARCELONA. A cuentagotas, pero las empresas catalanas que trasladaron sus sedes fuera de Cataluña tras el referéndum del 1 de octubre de 2017, por miedo al 'procés', están empezando a regresar a sus lugares de origen. En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Molins informó ayer de que su nuevo domicilio social vuelve a estar en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona). La compañía, que cotiza en Bolsa, fue una de las miles de empresas catalanas (unas 4.000) que deslocalizaron su sede social. De Barcelona se trasladó a Madrid hace

El 'Govern' asegura que la «normalidad» política garantizará la vuelta paulatina de las compañías a Cataluña

siete años y ahora ha tomado el camino de regreso a casa. Tiene 4.000 empleados y factura 1.300 millones. Hacía un tiempo que la empresa contemplaba la posibilidad de retornar a su origen. La determinación, de hecho, enfrentó a la familia propietaria y el pulso llegó a los tribunales.

La primera operación de retorno la anunció Laboratorios Ordesa, fabricante de leches infantiles. Hace siete años, se trasladó de Barcelona a Huesca. También han vuelto tras la huida del 1-O Agbar o Red Points. Las grandes cotizadas, como CaixaBank o el Sabadell, fueron la punta de lanza de la fuga masiva. De momento, no han expresado su intención de regresar.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se felicitó ayer de que Cataluña vaya recuperando compañías señeras. «Podemos abrir una etapa de avances si hacemos bien el trabajo», con «estabilidad política y seguridad ju-

ridica», afirmó. El 'Govern' siempre ha sostenido que los regresos empresariales son señal de «normalidad política». Y este cambio de etapa se traducirá este viernes en la asistencia de Illa en Madrid a los actos de celebración del día de la Constitución en el Congreso. Illa romperá así con una tendencia, que se había convertido ya en habitual, que era la de la ausencia del presidente de la Generalitat en la efeméride de la Carta Magna. El último que participó en las conmemoraciones fue José Montilla. Pasqual Maragall no fue en ninguna ocasión y Jordi Pujol asistió por última vez en 1988.

Illa, que prometió el cargo con fidelidad al Rey y a la Constitución, asegura que «Cataluña ha vuelto» como autonomía española. Participó en el desfile del 12-O en Madrid, fue recibido en audiencia por el Rey en la Zarzuela y también ha restituido la bandera española en su despacho en el Palau de la Generalitat. Desde el primer día se ha propuesto encauzar las relaciones con las instituciones y el próximo 13 de diciembre estará presente en Santander en la conferencia de presidentes autonómicos. El 'Govern' reivindicó ayer la Constitución en un acto celebrado por la Delegación del Gobierno en Cataluña.

Unas 4.000 firmas catalanas trasladaron sus sedes sociales a otras ciudades españolas por el referéndum del 1-O